



Georgia Catholics Against the Death Penalty

Católicos de Georgia en contra de la Pena de Muerte (GACADP por sus siglas en inglés)

Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 485 (House Bill 485 o HB 485 por sus siglas en inglés)

Proceso criminal, imposición de la pena de muerte en este estado, abolición.

Presentada por los Representantes Moore del distrito 95, Werkheiser del distrito 157, Holcomb del distrito 81, Mitchell del distrito 88, Kennard del distrito 102, entre otros.

Sentencia de pena de muerte en Georgia

Número actual de reos bajo pena de muerte: 40

(http://www.dcor.state.ga.us/sites/all/themes/gdc/pdf/Roster_death_row_CY_2021.pdf)

Mujeres bajo pena de muerte: 1

Personas de color bajo pena de muerte: 21

- 20 afroamericanos, 1 hispano. En 2019 se estimó que los afroamericanos representaban el 32.6% de la población en el estado de Georgia. La población de reos afroamericanos bajo pena de muerte es del 50%. (<https://www.census.gov/quickfacts/GA>)

Exoneraciones: 7

Clemencias: 9

Ejecuciones desde 1976: 76

(<https://deathpenaltyinfo.org/state-and-federal-info/state-by-state/georgia>)

Discapacidades intelectuales y la pena de muerte en Georgia

Georgia es el único estado en el país que exige que las personas comprueben una discapacidad intelectual más allá de cualquier duda razonable para evitar una ejecución. Es el único estado que le exige al jurado que decida simultáneamente si el acusado es culpable y si efectivamente presenta una discapacidad intelectual. Ninguna persona que se ha enfrentado a la posibilidad de ser condenada a la pena de muerte ha sido capaz de comprobar que sufre de una discapacidad, lo que significa que las personas en Georgia que viven con una discapacidad intelectual corren el riesgo de ser ejecutadas.

Disuasión del crimen

De acuerdo a una encuesta realizada a los anteriores y actuales presidentes de las sociedades académicas criminológicas más importantes del país, un 88% de los expertos rechaza la noción de que la pena de muerte actúa como un agente disuasorio del crimen.

Opinión pública y posición pro-vida

Una encuesta del grupo Gallup realizada en el año 2018 demostró que menos de la mitad de los estadounidenses creen que la pena de muerte es aplicada de manera justa. El número de estadounidenses que está a favor de la pena de muerte es actualmente el más bajo de los últimos 40 años. El número de legisladores republicanos estatales que han presentado una propuesta de ley para abolir la pena de muerte se ha incrementado drásticamente desde 2012.

Entre los años 2000 – 2012 era poco común que un legislador estatal del partido republicano presentara una propuesta de ley para abolir la pena de muerte. A partir de 2013 el número anual de legisladores estatales republicanos que propusieron una ley de este tipo aumentó a más del doble. En 2016, el número de legisladores republicanos que presentaron este tipo de propuesta, fue 10 veces mayor que en el año 2000. Más del 67% de los republicanos que presentaron proyectos de ley similares lo hicieron en estados tradicionalmente conservadores.

Desde el año 2016, tres estados más han aprobado leyes para abolir la pena de muerte, además de una decisión del estado de California de suspender temporalmente las ejecuciones. Recientemente, el estado de Virginia ha aprobado una ley que abole la pena de muerte y que en este momento solamente requiere la firma del gobernador para hacerse oficial. Adicionalmente, en una encuesta realizada en el 2019, 56% de las personas en Georgia están a favor de reemplazar la pena de muerte por la opción de condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“A medida que más republicanos reconsideran su posición sobre la pena de muerte, se dan cuenta de que su abolición es una decisión a favor de la vida”.

(<https://www.ncronline.org/news/justice/over-250-conservative-activists-sign-statement-opposing-death-penalty> & <https://s22101.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/01/GA1219DeathPenaltyResults.pdf>)

Las víctimas rechazan la pena de muerte

Los familiares de las víctimas piden el fin de la pena de muerte y declararon que “la pena de muerte no previene la violencia. No resuelve el crimen ... agrava el trauma de perder a un ser amado y crea un duelo adicional en otra familia. También malgasta millones de dólares que pueden invertirse en programas que verdaderamente reduzcan el índice criminal y la violencia, y que atiendan las necesidades de familias como las nuestras”.

(<https://deathpenaltyinfo.org/news/former-state-and-federal-judges-prosecutors-and-law-enforcement-officials-and-families-of-murder-victims-urge-federal-government-to-call-off-executions>)

Alternativas para el uso de los fondos destinados a la pena de muerte

Se estima que la pena de muerte requiere unos 2.5-3 millones de dólares adicionales en comparación a una sentencia a condena perpetua sin opción a libertad condicional. En el año 2008, el estado de Georgia gastó más de 3 millones de dólares en un solo caso. El presupuesto sugerido para el año fiscal 2022 es 1.2 billones de dólares menos que el presupuesto anterior a la pandemia. Los fondos se necesitan urgentemente en otros sectores de la economía. Tanto las agencias de educación como las de salud se enfrentan a recortes de presupuesto estimados en cientos de millones de dólares.

Tanto la educación como la protección policial son medios efectivos para disuadir el crimen. El recortar presupuestos de estas agencias solo resultará en aumentos presupuestarios de las correccionales. El uso de los fondos destinados a la pena de muerte en programas alternos es un manejo efectivo de los recursos fiscales (un ahorro estimado de \$138,000,000.)

(<https://gbpi.org/overview-of-georgias-2022-fiscal-year-budget/> & <https://www.georgiapol.com/2019/09/10/state-budget-cuts-to-eliminate-jobs-and-programs>)

Razones para apoyar esta legislación

Proyecto de Ley 485 (o HB 485 por sus siglas en inglés)

Proceso criminal, imposición de la pena de muerte en el estado, abolición.

Presentada por los Representantes Moore del distrito 95, Werkheiser del distrito 157, Holcomb del distrito 81, Mitchell del distrito 88, Kennard del distrito 102, entre otros.

Condena errónea que puede tener como consecuencia la ejecución de una persona inocente.

Prejuicios raciales.

Justicia desigual para los acusados.

No se ha comprobado que la pena de muerte sirva como agente disuasorio al momento de cometer un crimen.

Se gastan millones de dólares en encarcelamientos y largas apelaciones que deberían ser usados en resolver otros crímenes e invertir en la educación para prevenir el crimen.

Incrementa el trauma de perder a un ser amado para los familiares de las víctimas y lo extiende por décadas.